

EDITORIAL

EL EMBATE sin cuartel en contra del trabajo se decanta por una espiral descendente que desvaloriza la fuerza de trabajo y la reproducción socio-biológica de la mayoría de las clases y grupos sociales. De manera directa, los trabajadores padecen el desmantelamiento de los sindicatos y el desmembramiento de los ámbitos laborales, que de llegar a subsistir, son reestructurados como componentes dispersos de redes de capital global. A menudo, la preservación de la fuente laboral se negocia a condición de aceptar la flexibilización y precarización de las condiciones laborales: contención salarial, deterioro de prestaciones, amenaza de despido. De igual forma, el régimen de Estado social, o su remedo, es desmantelado por los programas neoliberales y se acepta como normal el trabajo informal y subcontratado. Asimismo, se promueven otras formas de trabajo, como el teletrabajo, el trabajo femenino en maquiladoras, el trabajo forzoso, el trabajo temporal de migrantes, etcétera. Las condiciones materiales y subjetivas de reproducción de la fuerza de trabajo y de los dependientes económicos se desgasta aceleradamente. Con la nueva división internacional del trabajo, las clases subalternas son invariablemente trastocadas.

En los países subdesarrollados se afianzan economías de enclave, exportadoras de materias primas y del valor de la fuerza de trabajo incorporada a las manufacturas procesadas en maquiladoras o plantas de ensamble deslocalizadas de las manufacturas de las economías centrales.

En conjunto, se consolida una economía global del trabajo barato, estrategia empresarial para abatimiento de costos y recurso para afrontar la competitividad que deteriora drásticamente las condiciones de vida de la mayoría de la humanidad.

El capital financiero campea en la economía mundial. No sólo adopta múltiples formas, como los fondos de inversiones, pensiones y soberanos, o los mercados de valores y futuros, provistos de una multiplicidad de instrumentos tóxicos, como los derivados, sino que también subsume la actividad productiva y gubernamental. Ejemplos degradantes son la conversión de las jubilaciones, que se insertan en prácticas especulativas, poniendo en vilo la subsistencia de los ex trabajadores. O la canalización de ganancias empresariales a instrumentos especulativos, no a la reinversión, lo que redundaría en desacumulación y volatilidad financiera. Algo semejante ocurre con la desviación de los presupuestos gubernamentales, que en lugar de invertirse en obra pública o programas de educación, salud y alimentación se desvían, también, a la bursatilización. Las familias pobres que acceden a créditos hipotecarios o créditos de consumo, comprometiendo sus precarios recursos como garantía, habitualmente son despojados de los bienes que adquieren y de su patrimonio, además de que tuvieron que pagar altas comisiones porque no pueden afrontar su deuda, que suele ser inflada artificialmente al influjo de los instrumentos financieros especulativos. La producción de alimentos también es trastornada por los esquemas financieros con el efecto consecuente del incremento de los precios; instrumentos tales como las compras de futuros y la financiarización de las agroindustrias, que incurren en prácticas especulativas como el vil ocultamiento de alimentos, que en conjunto contribuyen al incremento de precios, a la carestía y a la consecuente epidemia de hambruna y desnutrición.

Los gobiernos neoliberales, y en buena medida también los posneoliberales, promueven deliberadamente la estrategia exportadora de materias primas, principalmente petróleo, gas natural, minerales (oro y plata), maderas, alimento (soya, café, azúcar). El extractivismo significa la consolidación de los países en economía de enclave cuyas exportaciones

son controladas, principalmente, por las corporaciones transnacionales, en canales de comercio internacional que son apéndices de las redes globales de capital, y postra a estas naciones en una inserción dependiente en la economía mundial; asimismo, significa una suerte de intercambio ecológico desigual, pues no sólo los costos humanos y ambientales se consideran meras externalidades, sino que además dejan una espiral de descomposición socioambiental, amén de que desplazan a comunidades agrícolas de sus ámbitos territoriales. La pretensión de impulsar el crecimiento y el empleo, y de captar mayores impuestos, no compensa, en modo alguno, la destrucción de los ámbitos de comunidad, los ecosistemas, las culturas materiales de los pueblos y, peor aún, perpetúa la inserción dependiente en la economía global.

El canon político de la democracia liberal y del gobierno corporativo precipita la derechización política. Inmersos en una vorágine política cortoplacista, los políticos sólo tienen en sus miras perpetuarse en los puestos de poder, paso a paso, por lo que tienen que traspasar un período legislativo, un ciclo gubernamental, garantizar una reelección o saltar a otra posición sin apego a las necesidades sociales. El cortoplacismo está aceitado de intereses ciegos y respaldado por los dineros privados interesados en beneficiarse con concesiones, privatizaciones y tajadas presupuestales. El engarzamiento entre la inmediatez política y la voracidad empresarial suele resolverse recubriendo las decisiones como procesos de negociación, donde se tiene que ceder (interés público) para incentivar el crecimiento económico (ganancias corporativas) y respaldar el modelo (continuidad política). Para justificarse, las decisiones se recubren con criterios técnicos, legales y burocráticos, sin consulta pública ni reparos sobre los efectos sociales y ambientales de mediano y largo plazos.

La noción de desarrollo suele presentarse como una estrategia de competitividad y crecimiento económico suplementada con programas de «combate a la pobreza». El desarrollismo propicia un clima favorable a la inversión corporativa que incluye la apertura de nuevos espacios de valorización en desmedro de la condición humana y la naturaleza. La

condición de pobreza se reduce a un parámetro, aun cierto nivel de percepción de ingresos monetarios, sin tomar en cuenta los procesos subyacentes de despojo de tierra o medios de producción, el desplazamiento por megaproyectos de infraestructura, extractivismo o inmobiliarios, las políticas de depresión salarial, despido y precarización laboral, el ataque a los sindicatos y a la normatividad laboral que tutela las prestaciones y, en general, la seguridad social. El combate a la pobreza se entiende, en primer término, como el otorgamiento de dádivas para controlar políticamente a la población menesterosa, y, en segundo lugar, como la inclusión de las personas de bajos recursos en la órbita del consumo masivo y la posesión de bienes materiales. El capital corporativo encuentra en los pobres un nicho de mercado, a los cuales se puede enganchar con microcréditos para la adquisición de vivienda, ropa, alimentos, enceres domésticos, etcétera. El crédito es un mecanismo de la banca comercial para encadenarlos a esquemas onerosos de financiamiento, que a menudo termina en despojo patrimonial. Asimismo, los pobres, clientes de los gobiernos, son carne electoral que se utiliza como respaldo social en los comicios para apoyar a políticos que canalizan recursos públicos para «combatir la pobreza».

En esta gestión del desarrollo, la salud pública se entiende discursivamente como el acceso a instalaciones y equipo hospitalario, a los servicios médicos y a los medicamentos. Sin contar el hecho de que las políticas ortodoxas de equilibrio macroeconómico afectan las partidas a la salud, con el consecuente deterioro de instalaciones, equipamiento y provisión de medicamento, con lo cual se promueve, soterradamente, la privatización de los servicios médicos. La política de salud no se entiende como el derecho de la población a permanecer sana, a no enfermarse; a acceder a alimentos inocuos y nutritivos, a convivir en espacios libres de contaminación, a disponer de una vivienda digna y a disponer de información suficiente para el cuidado de la salud, además de poder acceder a servicios médicos de calidad en caso de recaer en alguna enfermedad.

Asimismo, la educación pública, en el mejor de los casos, suele entenderse como el acceso a instalaciones equipadas con computadoras,

donde se perfila, cada vez más, la tentativa de formar «capital humano», esto es, personal con capacidades técnicas y profesionales que respondan a los requerimientos del sector empresarial. No se busca formar ciudadanos libres, seres humanos con la capacidad de entender y cuestionar el mundo en el que viven, y con el interés de aportar conocimientos y saberes en beneficio de su comunidad en conjunción con el medio ambiente.

El discurso de la cultura dominante tendiente a la modernización y la homogeneización pretende colonizar la conciencia colectiva para sujetarla a las pulsiones del mercado. El ciudadano es transfigurado en un cliente, tanto de los gobiernos que adoptan el credo gerencial y consideran que su función es ofrecer servicios bajo normas empresariales, como las corporaciones que implementan grandes campañas de mercadotecnia para condicionar las pautas de consumo hacia las mercancías de las grandes marcas.

El desarrollo humano se entiende, entonces, como la integración al mercado, como un proceso de formación de nuevos concurrentes del mercado. De este modo, la realización de los clientes asume nuevas identidades corporativas, como lo ilustra el apego a los dispositivos electrónicos de las pantallas, sea la televisión, *la tablet* o el teléfono celular, que genera entre los consumidores una cierta sensación de inclusión a la referida modernidad, en sintonía con los consumidores ubicados en otras ciudades del mundo. Paradójicamente, estos consumidores experimentan la sensación de acceder a una vastedad informativa y a espacios de entretenimiento; sin embargo, la ciudadanía permanece más desinformada y desorientada sobre lo que realmente sucede en su entorno.

Desmenuzar estos procesos de dominación cultural, política y económica es una tarea primordial del pensamiento crítico para entender el mundo contemporáneo, si acaso se tiene la mínima pretensión de proponer otros caminos donde la transformación social se oriente por la comunalidad, la convivencialidad, la solidaridad, la democracia y el vivir bien.

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS

